



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

El acercamiento al Derecho Penal del enemigo a través de los delitos de terrorismo.

Autor/es

ÁLVARO PUELLES ARNÁEZ

Director/es

SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Derecho

Departamento

DERECHO

Curso académico

2019-20



El acercamiento al Derecho Penal del enemigo a través de los delitos de terrorismo., de ÁLVARO PUELLES ARNÁEZ

(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.

Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright.

© El autor, 2020

© Universidad de La Rioja, 2020

publicaciones.unirioja.es

E-mail: publicaciones@unirioja.es



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Grado en Derecho

EL ACERCAMIENTO AL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO A TRAVÉS DE LOS DELITOS DE TERRORISMO

Autor: ÁLVARO PUELLES ARNÁEZ

Tutor: Prof. D. SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ

RESUMEN

En este documento se realizará un análisis sistemático de la evolución que ha sufrido el Código Penal, en lo relativo a los delitos de terrorismo, desde su redacción en 1995, hasta la última reforma llevada a cabo por la LO 1/2019, de 20 de febrero. Se realizará un estudio del Derecho Penal del enemigo y una posterior comparación de las características de este tipo de legislación con las reformas que se han ido efectuando en nuestro Código Penal, así como su injerencia en los principios y garantías de nuestro Derecho Penal.

ABSTRACT

In this document, a systematic analysis will be made of the evolution of the Criminal Code, regarding terrorist crimes, since its drafting in 1995, until the last reform carried out by the LO 1/2019, of 20 February. A study of the Criminal Law of the enemy will be carried out and a subsequent comparison of the characteristics of this type of legislation with the reforms that have been carried out in our Criminal Code, as well as its interference in the principles and guarantees of our Criminal Law.

ÍNDICE

RESUMEN	2
ABSTRACT	2
1. Introducción.....	4
2. Evolución del delito de terrorismo desde el CP de 1995 hasta nuestros días.	5
2.1. Definición de terrorismo.	5
2.2. Evolución del tipo objetivo del delito de terrorismo.	6
2.2.1. El objeto material, el bien jurídico protegido y la conducta típica.....	7
2.2.1.1. El Código Penal de 1995.....	7
2.2.1.2. Reforma llevada a cabo por la LO 5/2010, de 22 de junio.	8
2.2.1.3. Reforma llevada a cabo por la LO 2/2015, de 30 de marzo.....	11
2.2.1.4. Reforma llevada a cabo por la LO 1/2019, de 20 de febrero.	13
2.2.2. Evolución del sujeto activo y el sujeto pasivo.	14
2.3. Tipo subjetivo de los delitos de terrorismo.	18
3. Excesos Penales en relación con la tipificación de los delitos de terrorismo.	20
3.1. La expansión del Derecho Penal.....	20
3.2. Garantías y principios de nuestro Ordenamiento Penal afectados por las reformas en los delitos de terrorismo.	21
3.2.1. El principio de intervención mínima. El principio de proporcionalidad. .	21
3.2.2. El principio de legalidad y seguridad jurídica. El principio de taxatividad.	22
4. El acercamiento a un Derecho Penal del enemigo.....	24
4.1. El Derecho Penal del enemigo.	24
4.1.1. Características del Derecho Penal del enemigo.....	24
4.1.2. Esbozos filosóficos necesarios para comprender el Derecho Penal del enemigo.	27
4.1.3. Concepto del Derecho Penal del enemigo.	29
4.2. El conflicto que han originado las nuevas reformas con los principios y garantías del Ordenamiento Penal. Distanciamiento del Derecho Penal del ciudadano.	30
5. Conclusiones.....	34
BIBLIOGRAFÍA.	36

1. Introducción.

Los delitos de terrorismo a lo largo de la historia han provocado un gran pavor en la sociedad. En España, el fenómeno terrorista ha causado un gran impacto, debido al gran número de actos de esta índole. Esta gran afluencia de actos terroristas, así como la aparición de una nueva forma de terrorismo de carácter islamista, ha llevado a los poderes públicos a intentar luchar de todas las formas posibles contra este fenómeno para intentar erradicar este tipo de conductas.

En este trabajo se hablará sobre la evolución de los delitos de terrorismo en el tiempo, tomando como referencia el Código Penal de 1995, acabando con la nueva reforma efectuada en 2019, y como esta necesidad de los poderes públicos de tranquilizar e intentar garantizar la seguridad de sus ciudadanos ha llevado a utilizar todos los medios legales, siendo algunos controvertidos, para garantizar dicha seguridad, dando origen a esta legislación orientada a la lucha, a la aparición de un nuevo modelo penal en nuestro Ordenamiento, el Derecho Penal del enemigo.

Las continuas amenazas terroristas y por consiguiente, la aparición de nuevos modelos legales para acabar con ellas, me han llevado a plantearme si realmente el sistema legal está intentando solucionar el problema o erradicarlo. He realizado este trabajo para poder ver con claridad si los medios que se están utilizando van acorde a los principios enmarcados por nuestro Ordenamiento Jurídico.

El objetivo de este trabajo, por tanto, es conocer la corriente que está apareciendo en nuestro Cuerpo Penal, el Derecho Penal del enemigo, ver como ésta ha afectado a la evolución de este código, y por consiguiente, ver cómo ha colisionado con los principios y garantías rectores de nuestro Ordenamiento.

Para ello, se dividirá en dos partes principales. La primera, donde se delimitará el concepto de terrorismo y se realizará el análisis sistemático de la evolución que ha sufrido nuestro Código Penal en lo relativo a los delitos de terrorismo. La segunda parte principal, versará sobre el estudio de la expansión del Derecho Penal, así como del Derecho Penal del enemigo. Entre ambas partes se examinarán los diferentes principios y garantías imperantes en nuestro Ordenamiento Jurídico, centrándose este punto en aquellos principios que se ven más afectados por la aparición de esta nueva corriente y por el expansionismo del Derecho Penal. Por último, las conclusiones realizarán una breve síntesis de todo lo expuesto en el documento, así como una reflexión de lo que se ha visto reflejado en él.

2. Evolución del delito de terrorismo desde el CP de 1995 hasta nuestros días.

A lo largo de la historia, España ha tenido que hacer frente en numerosas ocasiones al fenómeno terrorista. Este fenómeno de la doctrina del terror, tal y como muestra su raíz etimológica: terror más el sufijo “ismo”, cuyo significado es doctrina, ha provocado un gran miedo en la sociedad que hace que todos los mecanismos tanto policiales como legislativos se pongan en funcionamiento buscando un mayor arsenal Penal para la lucha contra la doctrina del terror.¹

MUÑOZ CONDE nos dice que, el Derecho Penal, está formado por un conjunto de normas jurídicas, definiendo norma como “toda regulación de conductas humanas en relación con la convivencia. La norma tiene por base la conducta humana (...)”². Por tanto, en esta búsqueda de un mayor arsenal penal vemos que el Código Penal se va ajustando a las diferentes conductas de las organizaciones terroristas, adaptándose y evolucionando.

El Código Penal de 1995 estaba orientado a la lucha contra el terrorismo autóctono cuya estructura jerárquica se caracterizaba por tener una cadena vertical de mando y control definidas, fluyendo las ordenes de arriba hacia abajo. Tras los sucesos de 2004, con la aparición en España del terrorismo yihadista con una estructura organizativa totalmente diferente, basada en la inexistencia de una organización vertical y asentándose en forma de pequeñas células que trabajaban en forma, *mutatis mutandis*, de franquicias, así como la aparición de la organización terrorista Daesh, que introdujo la figura del terrorista independiente o “lobo solitario”, el legislador se dio cuenta de la necesidad de expandir nuestro derecho Penal, así como de la obsolescencia de la legislación existente.³

La reacción del legislador ante la aparición de estas nuevas formas de terrorismo provocó cambios en el tipo delictual recogido en el Cuerpo Penal del 95 que se materializaron en las reformas del 2000, 2010, 2015 y 2019, que analizaremos a continuación

2.1. Definición de terrorismo.

Antes de iniciar el análisis de la evolución del tipo delictual relativo al terrorismo, dedicaremos un apartado a definir el concepto para entender mejor el porqué de su tipo y su regulación.

El terrorismo es definido por la RAE como “actuación criminal de bandas organizadas que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos.”⁴

¹ CANO PAÑOS, Miguel Ángel. “Los delitos de terrorismo en el Código Penal español tras la reforma de 2010”. *La Ley Penal: revista de derecho Penal, procesal y penitenciario*, 2011, no 86, pág. 2.

² MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal. Parte General*. 9ª Edición. Tirant lo Blanch, 2015. Pág. 35.

³ SAMIEDO, Juan Pablo. La estructura y organización de los grupos terroristas bajo la óptica del aprendizaje organizacional. *Documento Marco*, 2015, vol. 24. <http://www.ieee.es/contenido/noticias/2015/10/DIEEEM24-2015.html>. Consultada en abril 2020.

⁴ Real Academia Española. Diccionario de la lengua española.

El profesor LÓPEZ CALERA nos aporta una definición desde el punto de vista de la filosofía del derecho y nos enmarca el concepto de terrorismo como “toda actividad violenta organizada por un grupo político y dirigida contra los derechos fundamentales de la persona humana y contra el orden jurídico propio de un Estado democrático de Derecho y contra la legalidad internacional, que trata de producir un terror indiscriminado, porque se ejerce no sólo contra los responsables o representantes de unos grupos políticos, sino también sobre una población de un Estado o de varios Estados, actividad que se realiza por motivos políticos para la destrucción de un orden político o para la conquista del poder político.”⁵

A nivel europeo, la Unión Europea establece una definición de terrorismo: “actos cometidos con el objetivo de intimidar seriamente a una población, obligar indebidamente a un gobierno u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar cualquier acto o a desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o una organización internacional”.⁶

Por último, la última reforma del CP llevada a cabo por la LO 1/2019, de 20 de febrero, modifica la definición, marcada por la LO 2/2015, de 30 de marzo, del terrorismo y con ello del delito de terrorismo vigente actualmente en nuestro Ordenamiento Jurídico: “Se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías”⁷ siempre y cuando se lleven a cabo con las finalidades de subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Una vez aclarado el propio concepto de terrorismo y cuál es la definición imperante en nuestro Ordenamiento, se pasará a analizar punto por punto el tipo delictual del delito de terrorismo.

2.2.Evolución del tipo objetivo del delito de terrorismo.

Ante todo debe aclararse, tal y como dice CAPITA REMEZAL en su tesis doctoral, que los delitos terroristas no son más que delitos comunes cualificados, bien por la finalidad que persiguen con su realización, o bien por la pertenencia del autor a una organización terrorista, es ésta la razón de que el concepto jurídico marcado anteriormente

⁵ LOPEZ CALERA, Nicolás María. “El concepto de terrorismo: ¿Qué terrorismo? ¿Por qué el terrorismo? ¿Hasta cuándo el terrorismo?” *Anuario de filosofía del derecho*, 2002, no 19, p. 51-71. Pág. 10-11

⁶ Página web del Parlamento Europeo. <https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/security/20180703STO07127/terrorismo-en-la-ue-desde-2015>. Consultada en abril 2020.

⁷ Art. 20 Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

se proyecte sobre un conjunto de delitos comunes y no sea, por tanto, un tipo penal concreto.⁸

2.2.1. El objeto material, el bien jurídico protegido y la conducta típica.

Para empezar el análisis del tipo objetivo del terrorismo a lo largo de las diferentes reformas que lo han modificado, hablaremos del objeto material, del bien jurídico protegido y de la conducta típica. El objeto material lo podemos definir como la “persona, animal o cosa sobre la que recae la acción delictiva”⁹, el bien jurídico protegido lo podríamos concretar en “el bien tutelado por el Estado con ocasión de la tipificación de una determinada conducta como delito” y, por último, la conducta típica se puede fijar como “la conducta o actuación humana descrita con sus características objetivas y, en su caso, subjetivas en el tipo de delito”¹⁰.

2.2.1.1.El Código Penal de 1995.

El análisis del tipo objetivo, en los elementos anteriormente descritos, empezará con el Cuerpo Penal de 1995. El Código Penal de 1995 incluye los delitos de terrorismo en la Sección 2ª del Capítulo V del Título XXII donde se encuentran los delitos contra el orden público. Comprendiendo esta Sección del art. 571 al 580.

En este Cuerpo Penal no encontramos un objeto material único para los delitos de terrorismo, ya que todavía la legislación no lo enmarca como un delito autónomo, castigando una serie de conductas típicas que son incluibles en los diferentes tipos comunes. Una muestra ilustrativa sería la redacción del art. 571 del Cuerpo Penal del 95, que nos dice: “los que perteneciendo, actuando al servicio (...) con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. cometan los delitos de estragos o de incendios tipificados en los art. 346 y 351 (...)” aquí el objeto material serían los aeropuertos, puertos, locales, etc. Así como la conducta típica correspondería a la acción de provocar explosiones o destrucción en el caso del art. 346 CP y la acción de provocar un incendio en el caso del art. 351 CP. Sin embargo, si dentro de la misma sección acudiríamos al art. 572 del CP del 95 que engloba los atentados contra la vida realizados por miembros de un organización terrorista, el objeto material sería la persona física contra la que se atenta y la conducta típica, la acción de atentar contra la vida. Siguiendo con el articulado, vemos que el objeto material va cambiando, siendo, por ejemplo, en el art. 573 CP, que reza: “El depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables (...)”, dichas armas, sustancias o aparatos. En este artículo encontraríamos una conducta típica diferente, que sería la de depositar, almacenar o tener en posesión dichas armas que

⁸ CAPITA REMEZAL, Mario. *El concepto jurídico de terrorismo: los delitos de terrorismo en el Código Penal de 1995, un análisis doctrinal y jurisprudencial: especial referencia al terrorismo individual*. Tesis doctoral. 2007. Pág. 91 <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/11506>. Consultada en abril 2020.

⁹ ZÁRATE CONDE, Antonio; GONZÁLEZ CAMPO, Eleuterio. *Derecho Penal. Parte general*. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA, 2019. Pág. 67-68.

¹⁰ Definiciones extraídas de: Real Academia Española. Diccionario del español jurídico.

conforman el objeto material. Al igual que hemos dicho al principio, al aclarar que no hay un objeto material único en los delitos de terrorismo, podemos señalar que tampoco hay una conducta típica, ya que remitiéndonos al principio de este párrafo, los delitos de terrorismo no son un delito autónomo sino que son una serie de delitos comunes cualificados.

Esta multiplicidad de objetos materiales y de acciones típicas se da también en el ámbito de los bienes jurídicos protegidos, si bien es cierto que podríamos establecer como bienes jurídicos protegidos comunes a estos delitos, a los delitos de terrorismo, el orden constitucional o la paz pública, encontramos numerosos daños que se pueden producir en bienes jurídicos individuales, tales como la vida o la propiedad privada.

En este aspecto la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación del Código Penal no realiza ningún cambio sustantivo, ya que solo afecta a lo relativo a la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo.

2.2.1.2.Reforma llevada a cabo por la LO 5/2010, de 22 de junio.

En cambio, la reforma del Código Penal del 95, llevada a cabo por la LO 5/2010, de 22 de junio, sí que provocó grandes cambios legislativos en lo relativo a los delitos de terrorismo.

El primer cambio importante respecto de la regulación anterior lo encontramos en la modificación estructural del Código Penal del 95. Tras la reforma efectuada los delitos de terrorismo los encontramos en la Sección 2ª del Capítulo VII del Título XXII donde se ubican los delitos contra el orden público. Respecto de esta modificación me gustaría mencionar la creación de un Capítulo específico de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo, así como la aparición la Sección 1ª del mismo capítulo, respectiva a las organizaciones y grupos terroristas.

Respecto a la diversidad que encontramos en el objeto material, en la conducta típica y en el bien jurídico protegido no encontramos cambios manteniéndose esa variedad. Sin embargo, sí que vemos la inclusión de un mayor número de tipos, tales como los enmarcados en el art. 571 del nuevo CP, en el art. 576 CP, en el art. 576 bis CP y el situado en el art. 579 CP. Estos artículos se irán analizando, en cuanto al objeto material y al bien jurídico protegido, con el Cuerpo Penal del 95, a excepción del art. 571 CP que lo examinaremos cuando estudiamos la evolución del sujeto activo, sobre el cual solo versa decir que la conducta típica correspondería a promover, constituir, organizar o dirigir, tal y como versa la redacción de dicho precepto.

En el primer artículo a analizar, el art. 576 CP, se puede observar que, con la nueva regulación, se añade un apartado con respecto a la regulación marcada en 1995. En la redacción original vemos que en el art. 576, el cual habla sobre los delitos de colaboración, nada dice sobre la captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación. Este nuevo apartado es añadido por la LO 5/2010, de 22 de junio para

incorporar las novedades europeas en esta materia plasmadas en la DM 2008/919¹¹, y se incorpora con la siguiente redacción: “las mismas penas previstas en el número 1 de este artículo se impondrán a quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación, dirigida a la incorporación de otros a una organización o grupo terrorista o a la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo”. El problema encontrado para analizar el objeto material y el bien jurídico en este punto es la enmarcación de este tipo delictual, tanto el original recogido en el CP del 95, como el redactado tras la reforma, de los delitos de colaboración con una organización o grupo terrorista, en los delitos de peligro abstracto, “delitos de mera actividad cuya punición descansa en la peligrosidad generada de la acción típica para un determinado bien jurídico”¹², es decir, delitos donde no hay una efectiva situación de peligro, sino que son castigados por su posibilidad de crear dicho riesgo. Este problema no lo encontramos al enmarcar la conducta típica que sería la acción de realizar actividades encaminadas al adoctrinamiento, adiestramiento o formación.

En conclusión, podríamos decir que el objeto material añadido en esta nueva redacción del art. 576, en su tercer apartado, se integraría por las personas sobre las que se realice ese adoctrinamiento, etc., y la acción típica sería realizar dichas actividades mencionadas como pertenecientes al tipo delictual. Sin embargo, no podemos fijar un bien jurídico protegido, debido al adelantamiento de las barreras de punición, pudiendo únicamente suponer que el bien jurídico protegido fuera el propio orden constitucional o la paz pública, aunque si también es cierto el bien jurídico podría ser individual si el adoctrinamiento se realiza para atacar contra una propiedad privada o contra la vida, como ya decía anteriormente, no se puede concretar exactamente el bien jurídico protegido en este aspecto.

La siguiente cuestión a analizar sería el art. 576 bis, que fue añadido por la reforma del texto inicial llevada a cabo en 2010. En este nuevo artículo se hace referencia al delito de financiación de actividades terroristas.

Para iniciar el examen de este artículo se comenzará con la redacción del Código de 1995. Respecto a dicho delito, el CP del 95 nos lo incluye de la siguiente manera en el art. 576.2: “(...) cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.” En este punto, se observa ya la financiación de actividades terroristas, al igual que se deja entrever en el apartado 1 del mismo artículo que reza: “Será castigado con las penas (...) cualquier acto de colaboración con las actividades o finalidades de una banda armada, organización o grupo terroristas.” Sin embargo, la reforma efectuada en el 2010 crea un nuevo delito autónomo en el ámbito de colaboración con organizaciones terroristas, el nuevo delito

¹¹ Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Decisión Marco 2002/475/JAI sobre la lucha contra el terrorismo.

¹² MADRIGAL NAVARRO, Javier. “Delitos de peligro abstracto, fundamento, crítica y configuración normativa”. *Revista Judicial*, Costa Rica, no 115. Pp. 169-186. Pág. 171.

se encuentra enmarcado, con la nueva redacción, en el artículo citado anteriormente, en el 576 bis que nos dice lo siguiente: “El que por cualquier medio, directa o indirectamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados (...) o para hacerlos llegar a una organización o grupos terroristas (...)”. Este precepto recoge la conducta típica de proveer o recolectar fondos, modificándose, con respecto a la redacción del art. 576.2 del Cuerpo Penal del 95, únicamente en sentido formal y no material, ya que la conducta típica ya mencionada, y la recogida en la anterior redacción que nos dice ayudar o mediar económicamente, vienen a establecer la misma acción.

Tampoco podemos hablar de una modificación sustancial, ni del objeto material, ni del bien jurídico, ya que seguirán siendo los mismos que en el Cuerpo Penal del 95. Únicamente se ha producido una separación. Extrayéndose el delito de financiación de su artículo original y creando un delito autónomo. Por lo tanto, el objeto material, seguirán siendo los fondos destinados a la actividad terrorista, o como narra el Código Penal del 95, la ayuda económica. El bien jurídico sigue siendo impreciso o difícilmente precisable en este asunto, al igual que mencionábamos anteriormente, pudiendo ser un bien jurídico individual si esos fondos se destinan a dañar un bien jurídico en concreto, o un bien jurídico colectivo, tal como la paz pública o el orden constitucional.

Para acabar de analizar las reformas introducidas por la LO 5/2010, desde el punto de vista de los elementos del tipo objetivo, a excepción de los sujetos activo y pasivo, solo falta examinar el delito de propaganda.

El delito de propaganda no estaba recogido como tal en el Cuerpo Penal del 95, sino que se encontraba incluido en la provocación recogida en el art. 578 del CP 95, tal y como nos dice su redacción: “La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en los artículos 571 a 577, se castigará (...)” siendo aquí el objeto material los actos que se realicen para provocar, conspirar y proponer. La conducta típica en este artículo sería la de provocar, conspirar o proponer, es decir, realizar las acciones tipificadas. Esto cambia con la redacción dada por la LO 5/2010 que añade otros tres apartados. En el apartado 1 del art. 579 CP de esta nueva redacción, donde se regula la provocación, conspiración y proposición, se añade un nuevo párrafo: “Cuando no quede comprendida en el párrafo anterior- donde se encuentra la redacción recogida anteriormente- o en otro precepto de este Código que establezca mayor pena, la distribución o difusión pública por cualquier medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo (...)”. Por lo tanto, vemos que es en esta nueva redacción donde se recoge realmente el delito de propaganda, en el que los actos realizados para la distribución o difusión pública serían el objeto material, apareciendo una nueva conducta típica, la de distribuir o difundir públicamente mensajes o consignas dirigidas a provocar la perpetración de delitos de terrorismo.

Respecto del bien jurídico protegido vemos que, al igual que en los tipos mencionados anteriormente, es muy ardua su delimitación, ya que, tanto en su

redacción en 1995, como en su posterior ampliación de 2010, recogen delitos de peligro abstracto. En concreto, con la inclusión de esta nuevo párrafo, vemos conductas recogidas que se encuentran muy por debajo del umbral de lo que puede llegarse a considerar una conducta de provocación. Por ello el bien jurídico protegido será de un tipo u otro, pudiendo arriesgarnos a decir que aquí se protege más el bien jurídico colectivo, la paz pública o el orden constitucional.

Finalizado este análisis pasaremos a examinar otra gran reforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Esta reforma modifica el Capítulo VII del título XXII del libro II del Código Penal, relativo a las organizaciones y grupos terroristas, reescribiendo y alterando los artículos expuestos a continuación.

2.2.1.3.Reforma llevada a cabo por la LO 2/2015, de 30 de marzo.

Uno de los grandes cambios llevados a cabo por esta reforma es la alteración del art. 573 CP. Esta alteración provoca la aglutinación de los delitos de terrorismo, que pasan de estar dispersos por toda la sección, a estar comprimidos en un único artículo, provocando así la aparición de una definición legislativa de los delitos de terrorismo. Respecto del objeto material, al igual que la conducta típica, este irá variando, dependiendo del delito que se realice. El bien jurídico individual protegido seguirá permutando según el delito realizado. Respecto de los bien jurídicos colectivos podemos ver con esta nueva redacción una mayor concreción, pudiendo extraerlos de las finalidades con la que se tienen que llevar a cabo los delitos tipificados, en el art. 573 CP, para que sean considerados como delitos de terrorismo. Estos bien jurídicos serían, a parte de los ya mencionados como el orden constitucional o la paz pública, el funcionamiento de una organización internacional o la propia población.

Se observa la suma de un nuevo artículo, el art. 573 bis CP, en el cual se estipulan las penas correspondientes a los delitos tipificados en el art. 573.1, así como una inclusión muy controvertida y criticada por la doctrina, la inclusión de los delitos de sedición, rebelión y desórdenes públicos. La introducción de estos delitos viene redactada, en el art. 573 bis.4 CP, en los siguientes términos: “El delito de desórdenes públicos previsto en el artículo 557 bis, así como los delitos de rebelión y sedición, cuando se cometan por una organización o grupo terrorista o individualmente pero amparados en ellos, se castigarán con la pena superior en grado a las previstas para tales delitos.” Aquí, el objeto materia de los delitos de rebelión, sedición o desórdenes públicos no varía por estar incluidos en esta sección, siendo este el conjunto de actos que se realicen para esa rebelión, sedición o desorden, tales como manifestaciones, las autoridades sobre las que recaigan los actos violentos, etc. Al igual que ocurrirá con la conducta típica, que se mantendrá la recogida en el artículo 557 bis, siendo esta, por ejemplo, la de portar un arma o instrumento peligroso en el contexto de un acto de rebelión, sedición o desorden público.

El bien jurídico sí que se encuentra más definido, ya que estos delitos van encaminados, en su mayoría a alterar el orden constitucional o incluso la paz pública, por ello, el bien jurídico sería alguno de ellos.

El art. 574 CP con esta nueva redacción incorpora el depósito y tráfico de armas, cosa curiosa, ya que se encuentra recogido una primera vez en el art. 573 CP ya mencionado con la siguiente redacción: “Se consideran delitos de terrorismo la comisión de cualquier delito (...) tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (...)”. Sin embargo, se añaden dos apartados respecto de la redacción del Código Penal de 2010. Estos dos apartados incluyen al delito de depósito de armas un agravante. Este agravante entrará en juego cuando el objeto material se convierta en un arma, dispositivo nuclear, químico o de cualquier otra índole que posea una potencia destructiva similar. Además se añade también, en el apartado tres de este artículo, un nuevo delito de terrorismo no recogido en las anteriores redacciones, dicho apartado dice lo siguiente: “Serán castigados con la pena de diez a veinte años de prisión quienes, con las mismas finalidades indicadas en el apartado 1, desarrollen armas químicas o biológicas, o se apoderen, posean, transporten, faciliten a otros o manipulen materiales nucleares, elementos radioactivos o materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes”.

En consonancia, al aparecer un nuevo delito, aparece un nuevo objeto material, siendo este, todas aquellas materias, armas o elementos recogidos en la redacción y una nueva conducta típica: transportar, desarrollar, apoderarse, poseer o manipular elementos radioactivos o materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes. Respecto del bien jurídico seguirá siendo indefinido, dependiendo de si atentan contra bienes individuales o contra bienes colectivos.

Otra novedad respecto de la redacción del Cuerpo Penal resultante de la reforma del 2010, es el art. 574 CP en el que se incluyen y se convierten en delitos autónomos el adoctrinamiento y el adiestramiento militar. Estos se encontraban en la anterior reforma en el art 576.3 incluidos en los delitos de colaboración con una organización terrorista. Además, en el tercer párrafo de su segundo apartado vemos la siguiente redacción: “Asimismo se entenderá que comete este delito quien, (...) adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a la incorporación de una organización o grupo terrorista (...)”. Se puede observar que se reitera el delito de provocación al terrorismo recogido ya en el art. 579 del mismo código.

Aquí, el objeto material serán las personas sobre las que se realizan esas actividades de adoctrinar o adiestrar, siendo la conducta típica la realización de dichas acciones, manteniéndose sin mutar con respecto a su introducción con la reforma de 2010. El bien jurídico protegido quedará indefinido, pudiendo ser un bien jurídico individual si se le adiestra o adoctrina para matar a una persona en concreto, o colectivo si, por ejemplo, se le adiestra para poner un artefacto explosivo en el Congreso de los Diputados.

La LO 2/2015 suprime el art. 576 bis, incluyendo la financiación de las organizaciones terroristas en la nueva redacción del art. 576, estipulando, en su primer apartado, lo siguiente: “ Será castigado (...) el que, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen (...) para cometer cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo.” Vemos la aparición de un nuevo objeto material, los valores o bienes utilizados con la intención mostrada en la redacción del artículo y de una nueva conducta típica, siendo esta la realización de una acción correspondiente al conjunto de verbos incluidos en la composición del artículo. En este delito, podríamos aventurarnos a decir que el bien jurídico será colectivo, ya que se están utilizando dichos valores para apoyar a una organización terroristas que tiene como objetivo la subversión del orden constitucional o la alteración de la paz pública, pudiendo decir que son estos dos elementos los bienes jurídicos protegidos, el orden constitucional y la paz pública.

En cuanto a los delitos de colaboración vemos que siguen estando recogidos los delitos de adiestramiento y adoctrinamiento en el art. 577 CP, aun siendo estos separados y marcados en un artículo autónomo. Obviando esto, vemos que se añade una figura relativa al tipo subjetivo, la imprudencia grave, respecto de la redacción dada por la reforma del 2010.

Los artículos que quedan por analizar tales como el art. 578, el art. 579 y el 579 bis no producen ninguna modificación respecto del objeto material o del bien jurídico protegido, así como tampoco de la conducta típica, ya que solo producen modificaciones en las penas, ampliando en mayor medida su cuantía.

2.2.1.4.Reforma llevada a cabo por la LO 1/2019, de 20 de febrero.

Finalizado el análisis de la LO 2/ 2015, pasaremos a examinar la última reforma relativa a los delitos de terrorismo llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

En lo relativo a los elementos que venimos viendo, vemos que esta nueva redacción no produce muchos cambios, ya que se centra en la modificación de penas, sobre todo en la ampliación de estas. Por ello no le prestaremos gran atención.

Esta ampliación la podemos observar en el art. 572 CP de esta nueva redacción por la que el nuevo arco de pena, para aquellos que promueven, constituyan, etc., una organización terroristas, pasa de ser de 8 a 14 años e inhabilitación especial durante este tiempo, a ser de 8 a 15 años e inhabilitación absoluta mientras dure la condena.

También produce cambios en el art. 575.3 CP, en su redacción del Código Penal del 2015 nos dice: “La misma pena se impondrá a quien, para ese mismo fin, o para colaborar con una organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de

los delitos comprendidos en este Capítulo, se traslade o establezca en un territorio extranjero controlado por un grupo u organización terrorista.” En la redacción de la LO 1/2019 se suprime este último requisito, no siendo necesario que dicho territorio extranjero este controlado por un grupo u organización terroristas.

Para finalizar este apartado en el que hemos ido viendo la evolución de los elementos del tipo objetivo correspondientes al objeto material, la conducta típica y el bien jurídico protegido me gustaría volver a citar una frase que ya remarqué al principio de este punto: “al no ser un tipo penal concreto no hay un delito terrorista, sino que cualifica de modo singular diversos tipos penales comunes”⁸. Por ello no podemos definir un solo bien jurídico protegido, o un solo objeto material, así como una única acción delictiva sino que estos tres elementos irán variando en consonancia del delito de terrorismo realizado.

2.2.2. Evolución del sujeto activo y el sujeto pasivo.

Una vez vista la evolución del objeto material, del bien jurídico protegido y de la conducta típica, se mostrará la evolución que han sufrido el sujeto activo y el sujeto pasivo.

Antes de nada, y como ya hicimos en el primer apartado, se aclarará el significado de estos dos elementos con las explicaciones de MUÑOZ CONDE. El sujeto activo será “aquel que realiza la acción prohibida u omite la acción esperada” y el sujeto pasivo lo podemos definir como “el titular del bien jurídico”.¹³

Una vez dicho esto comenzaremos este análisis con el sujeto pasivo, ya que no se ha visto afectado en la evolución siendo siempre, tal y como dice CAPITAL REMEZAL, “aquellos titulares de los bienes jurídicos protegidos, que en su vertiente colectiva, son el Estado la sociedad en su conjunto; y en su vertiente individual, cada uno de los titulares del bien jurídico atacado, como son la vida, la integridad física, la libertad, el patrimonio, etc.”

Sin embargo, el sujeto activo sí que ha ido variando, no tanto su definición o su idea en sí misma, como su regulación. Dentro de este sujeto activo observamos dos clases de sujetos, la organización o grupo terrorista y el terrorista individual o “lobo solitario”.

El análisis comenzará con la definición de organización y grupo terroristas. El art. 571 del Código Penal nos las define de la siguiente manera: “A efectos de este Código se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto la comisión de alguno de los delitos tipificados en la sección siguiente”. Siendo esta sección la de delitos de terrorismo.

¹³ MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal. Parte General*. 9ª Edición. Tirant lo Blanch, 2015. Pág 273 y 277.

Por lo tanto, serán organizaciones terroristas, reuniendo los requisitos establecidos en el articulado, aquellas agrupaciones formadas por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, y serán grupos terroristas, las uniones de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal, tengan por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos. Además de cumplir con esto, para ser considerada organización o grupo terrorista deberán tener como finalidad la comisión de los delitos incluidos del art. 573 al 580 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objetivo de alterar la paz pública, subvertir el orden constitucional, desestabilizar el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella.

Una vez vista la definición dada por la última redacción del Código Penal, pasaremos a ver su evolución desde el Cuerpo Penal del 95, hasta la tesis descrita en el marco legal actual.

La redacción del Cuerpo Penal de 1995 no distinguía aun entre banda armada y grupo u organización terrorista, no definía de forma explícita este tipo de organizaciones tal y como muestra la redacción del art. 571 CP que nos dice: “Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública (...)”. Por lo tanto, se puede observar que este Cuerpo Penal nos definía organización o grupo terrorista como aquellas bandas o grupos armados que tenían como finalidad los objetivos antes mencionados.

Esta situación cambio con la entrada en vigor de la reforma llevada a cabo por la LO 5/2010, de 22 de junio, que supuso un cambio estructural, produciéndose la separación entre banda armada y organización o grupo terrorista.

Esta distinción la podemos observar en la nueva redacción del art. 571 CP, dada por la LO 5/2010 que, en su apartado 1, suprime el concepto de banda armada, quedándose la siguiente escritura: “Quienes promovieran, organizaran o dirigieran una organización o grupo terroristas (...)”. Además, el apartado 3 del mismo artículo, establece por primera vez la definición de organización o grupo terrorista, rezando este artículo: “A los efectos de este Código, se considerarán organizaciones o grupos terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 bis y en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública mediante la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en la Sección siguiente.”

Al comparar las definiciones de la reforma llevada a cabo en 2010 con la definición vigente se puede observar que no distan mucho, ya que la reforma llevada a cabo en 2015, por la LO 2/ 2015, únicamente suprime la siguiente frase: “tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”. Manteniendo, esta reforma, dichas finalidades y añadiendo desestabilizar el

funcionamiento de una organización internacional y provocar un estado de terror en la población o en parte de ella en el art. 573.1 de esta nueva redacción. La LO 1/2019 no reforma el Código Penal en este aspecto, por lo que la definición actual de organización terrorista la otorga la LO 2/2015 con los cambios a los que ya nos hemos referido.

Una vez vista la definición de organización o grupo terrorista como sujeto activo y su evolución y antes de pasar a analizar el terrorista individual o “lobo solitario”, determinaremos otros sujetos activos.

Así como en el apartado de objeto material y bien jurídico protegido no se mencionó la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, en este punto si se tendrá en cuenta, ya que se incluye la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo estableciendo en su disposición adicional cuarta, la aplicación, penas y órganos competentes para juzgar e imponer a los menores que cometan los delitos de integración en una organización o grupo terrorista o los propios delitos de terrorismo.

Una definición que encontramos de sujeto activo en este tipo de delitos es el que pertenece, actúa o colabora con organizaciones o grupos terroristas, es decir, todo aquel que realice un delito de colaboración, tales como la financiación, apoyo, ayuda o cualquiera de los demás recogidos en el Código será también considerado como sujeto activo del delito de terrorismo.

Por último, y antes de analizar el terrorismo individual, hablaremos de la inclusión de la responsabilidad de la persona jurídica en los delitos de terrorismo, añadiendo la posibilidad de que éstas sean sujetos activos de estos delitos.

Esta adición la realizó la reforma llevada a cabo por la LO 5/2010 que en su artículo 576 bis. 3 estableció lo siguiente: “Cuando de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis de este Código una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le impondrán las siguientes (...)”. Por lo tanto, solo podría ser sujeto activo, según esta redacción, en el delito de financiación de una actividad terrorista o en algún otro recogido en el art. 573 del CP.

Esta posibilidad de que una persona jurídica fuera sujeto activo en los delitos de terrorismo quedó ampliada por la reforma llevada a cabo por la LO 1/2019, que amplió la posibilidad de ser sujeto activo en todos los delitos de terrorismo, tal y como nos dice la redacción del art. 580 bis del vigente CP: “Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes (...)”.

Para acabar con este epígrafe se examinará el terrorismo individual y el concepto criminológico de “lobo solitario”, siendo estos los sujetos activos que cometen los delitos de terrorismo sin estar integrados en una organización o grupo terrorista.

El terrorismo individual lo encontramos ya en el Código Penal de 1995, regulado en su art. 577 con la siguiente redacción: “Los que, sin pertenecer a banda armada,

organización o grupo terrorista, y con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública (...).

El delito de terrorismo individual se mantuvo en el tiempo. Únicamente se produjeron cambios superfluos en su redacción, añadiendo tipos comunes conforme iban evolucionando los delitos de terrorismo. La situación cambia con la entrada en vigor de la LO 2/2015, de 30 de marzo, en la cual se suprime el artículo 577, donde se encontraba regulada esta forma de terrorismo.

El Preámbulo de la LO 2/2015 nos dice lo siguiente: “El Código Penal no debe, en ningún caso, perder esa perspectiva de tipificación de las conductas articuladas en torno a organizaciones o grupos terroristas, pero es evidente que las nuevas amenazas exigen la actualización de la normativa para dar cabida al fenómeno del terrorismo individual y a (...)”. Esta afirmación realizada en el Preámbulo de la reforma choca con lo que realmente encontramos en ella, ya que la única referencia que encontramos al terrorismo individual es la que se encuentra en el art. 573.4 en lo relativo a los delitos de desórdenes públicos, rebelión y sedición con la siguiente redacción: “El delito de desórdenes públicos previsto (...) así como los delitos de rebelión y sedición, cuando se cometan por una organización o grupo terrorista o individualmente (...)”. Esto nos hace dudar de si en esta reforma se regula y castiga el terrorismo individual como tal, o se suprime ese concepto al no ser considerado como delito de terrorismo tal y como defienden algunos autores de la doctrina, tales como PRATS CANUT que dice: “este precepto pone de manifiesto la voluntad esencial de la legislación Penal en materia de terrorismo, cual es la de combatir las organizaciones de dicho signo, tal y como manifiesta que los mismos hechos realizados al margen de una organización, independientemente de su gravedad, se remite para su punición a la que corresponde por los delitos comunes, eso sí con la imposición de la pena en su mitad superior, por tanto, se les otorga la consideración que merece la concurrencia de una agravante específica o genérica al delito”¹⁴. En resumen, la doctrina considera que este precepto constituía una agravación genérica de las conductas comunes del CP.

Para concluir con este epígrafe definiremos el concepto de “lobo solitario” al que hemos estado haciendo referencia en diferentes partes del trabajo. Dentro del concepto de lobo solitario encontramos diferentes clasificaciones e incluso tipos de terroristas que encajarían con este término, pero no entraremos en ello, ya que no forma parte de nuestro trabajo, sino que únicamente utilizaremos la definición otorgada por Spaaj, el cual define el *lone Wolf* como aquel que, opera individualmente, no pertenece a ningún grupo, organización o red terrorista y que su *modus operandi* es concebido por el mismo no acatando jerarquías ni órdenes directas¹⁵.

¹⁴ Citada en la referencia 476 de: CAPITA REMEZAL, Mario. El concepto jurídico de terrorismo: los delitos de terrorismo en el Código Penal de 1995, un análisis doctrinal y jurisprudencial: especial referencia al terrorismo individual. 2007. <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/11506>. Consultada en abril 2020.

¹⁵ Citada en COTEÑO MUÑOZ, Alejandro. “Terrorismo individual= Individual terrorismo.” *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad*, 2018, no 15, p. 262-281. Pág 10. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4356>. Consultada en abril 2020.

2.3. Tipo subjetivo de los delitos de terrorismo.

Para finalizar la evolución que han sufrido los delitos de terrorismo a lo largo del tiempo, se analizará el tipo subjetivo, pero para ello se aclarará el significado de este componente del tipo.

Acudiremos para realizar esta definición a MUÑOZ CONDE. Este autor aclara que fue la teoría final de la acción¹⁶ la que consiguió demostrar que “la acción u omisión subsumible en el tipo no es un simple proceso causal ciego, sino un proceso causal dirigido por la voluntad hacia un fin.” Por lo tanto, se podría definir el tipo subjetivo como el tipo donde se incluye todo aquel contenido de la voluntad que rige la acción.¹⁷ En resumen, los autores aclaran que la acción delictual tiene que ir ligada con una intención de realizar dicha acción, ya sea de forma omisiva o de forma activa, no se realiza una acción delictual, y menos en estos delitos de terrorismo, sin una pretensión. Dentro de estas intenciones nos podemos encontrar intenciones dolosas, tanto activas como omisivas, así como imprudencias.

El dolo lo podemos definir como “el conocimiento y voluntad de realizar los elementos del tipo completo de injusto que son el presupuesto de la prohibición y antijuridicidad”¹⁸. Encontramos diferentes tipo de dolos, sobre los cuales no hablaremos, ya que no corresponde a los objetivos del trabajo. Por otro lado, y en ocasiones muy confundible con el dolo eventual¹⁹, encontramos la imprudencia. La imprudencia la podemos definir como la realización de acciones peligrosas que se realizan sin ánimo de lesionar el bien jurídico, pero por falta de cuidado o diligencia debida se ocasiona la lesión.

Una vez concretados estos conceptos vemos que tanto en el Código Penal del 95 como en su posterior reforma del 2000, no vemos ninguna especificación del tipo subjetivo relativo a los delitos de terrorismo. Según ASUA BATARRITA los rasgos comunes de los actos de terrorismo se pueden concretar en dos requisitos, uno de carácter objetivo, que versaría sobre la realización de una conducta tipificada, sobre el cual ya hemos hablado, y otro de carácter subjetivo o teleológico donde radica la intención de

¹⁶ Teoría formulada por el alemán Hans Welzel a principios de los años 30 del s. XX y sobre la que se construyó en años posteriores todo un sistema de la Teoría General del Delito. MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal. Parte General*. 9ª Edición. Tirant lo Blanch, 2015. Pág. 230.

Esta teoría afirma que no sólo la especial intención o motivación del autor, sino todo el dolo, debe pertenecer al injusto, pues la intención solo puede tenerla el que proceda dolosamente hacia esta dirección. ÁLVAREZ CRUZ, Enrique. “La teoría de la acción finalista, de Hans Welzel. Exposición y crítica de la misma a través de un libro de Carlos Fontan”. Pág. 5. https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344043682?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1963_0584.pdf&blobheadervalue2=1288774760129. Consultada en abril de 2020.

¹⁷ MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal. Parte General*. 9ª Edición. Tirant lo Blanch, 2015. Pág. 280.

¹⁸ Real Academia Española. Diccionario del español jurídico.

¹⁹ Conocimiento y aceptación de la posibilidad eventual, no segura, de realizar el hecho típico objetivo sin pretenderlo directamente, aceptación que se da si no hay una confianza mínimamente fundada en no producir el hecho. Real Academia Española. Diccionario del español jurídico.

“subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública”²⁰. Gracias a esto, se puede afirmar que los delitos de terrorismo tienen que ser realizados con dolo, ya que el sujeto activo, al realizar esas conductas punibles, tiene la intención de subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública. La reforma realizada en 2010 introduce la imprudencia grave²¹ en el art. 576 bis relativo al delito de financiación del terrorismo, esta imprudencia la observamos en la redacción del apartado 2 que reza: “El que estando específicamente sujeto por la ley a colaborar con la autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo de lugar, por imprudencia grave en el incumplimiento de dichas obligaciones (...)”. Posteriormente, con la reforma efectuada por la LO 2/2015, que en este aspecto no variará en la posterior reforma llevada a cabo en 2019, se mantiene la posibilidad de cometer un delito de financiación del terrorismo por imprudencia grave, como bien marca el art. 576. 4 en la redacción actual: “El que estando (...) por imprudencia grave en el cumplimiento de dichas obligaciones (...) será castigado (...)”. Además vemos la adición de la figura de la imprudencia grave en los delitos de colaboración con los actos de terrorismo enmarcados en el art. 577, concretamente en su tercer apartado, que manifiesta: “Si la colaboración con las actividades o las finalidad de una organización o grupo terrorista, o en la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en este Capítulo, se hubiera producido por imprudencia grave se impondrá la pena (...)”.

En conclusión, los delitos de terrorismo deben y tienen que ser, por las razones ya expuestas, cometidos con dolo, con una intención de realizar dichas acciones para subvertir el orden constitucional o alterar la paz pública, salvo en los delitos de financiación y colaboración que pueden ser cometidos por imprudencia grave.

²⁰ASUA BATARRITA, Adela. “Concepto jurídico de terrorismo y elementos subjetivos de finalidad. Fines políticos últimos y fines de terror instrumental”. *Estudios jurídicos en Memoria de José M. ^a Lidón*, 2009, vol. 8, p. 41. Pág. 21.

²¹ Se considera imprudencia grave cuando el sujeto activo omite todas las normas de cuidado para prevenir el hecho delictivo.

3. Excesos Penales en relación con la tipificación de los delitos de terrorismo.

Las reformas llevadas a cabo en el Código Penal respecto los delitos de terrorismo han sido ampliamente criticados por la doctrina, debido a que han provocado una mayor expansión del Derecho Penal, causando la aparición de unos esbozos del Derecho Penal del enemigo²².

Esta expansión del Derecho Penal ha llevado a rozar e incluso sobrepasar las fronteras marcadas por las garantías y principios de nuestro Ordenamiento Penal, atentando sobre todo contra el principio de intervención mínima e incluso contra el principio de legalidad y seguridad jurídica, sobre los que hablaremos a continuación, pero antes de pasar a analizar estos principios, se aclarará y analizará la idea de la “expansión del Derecho Penal”.

3.1. La expansión del Derecho Penal.

FERRAJOLI aclara que “el Derecho Penal nace cuando la relación bilateral parte ofendida/ofensor es sustituida por una relación trilateral, que ve en tercera posición o como imparcial a una autoridad judicial.” El autor afirma también que es por ello por lo que, cuando un juez aparece animado por sentimientos de venganza o parciales se vuelve a un estado salvaje, anterior al nacimiento de la civilización. En conclusión, el Derecho Penal nace para “cumplir una doble función preventiva, la prevención de los delitos y la prevención general de penas privadas o arbitrarias o desproporcionadas”.²³

Luigi Ferrajoli, define la ley penal como la *ley del más débil*, “orientada hacia la tutela de sus derechos contra las violencias arbitrarias del más fuerte. De este modo, los derechos fundamentales constituyen precisamente los parámetros que definen los ámbitos y los límites como bienes, los cuales no se justifica ofender ni con los delitos ni con las puniciones”²⁴. El problema lo encontramos cuando es el legislador quien es movido por esos sentimientos de venganza y sobrepasa los parámetros, marcados por los derechos fundamentales, en la estipulación y regulación de delitos y puniciones. En este momento se produce el expansionismo del Derecho Penal, y el esbozo de un Derecho Penal del enemigo.

La expansión del Derecho Penal se puede definir como “la tendencia dominante en la legislación de todos los países hacia la introducción de nuevos tipos penales, así como a una agravación de los ya existentes que cabe enclavar en el marco general de la restricción, o la «reinterpretación» de las garantías clásicas del Derecho Penal sustantivo y del Derecho Procesal Penal. Creación de nuevos “bienes jurídicos-penales”, ampliación

²² La expansión del Derecho Penal, así como la definición y análisis del Derecho Penal del enemigo serán tratadas en el punto 3, correspondiente al acercamiento a un Derecho Penal del enemigo.

²³ FERRAJOLI, Luigi. “El Derecho Penal mínimo”. En *Prevención y teoría de la pena*, 25-48. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 1995. Pág. 38.

²⁴ Ibidem. Pág. 39.

de los espacios de riesgos jurídico-penalmente relevantes, flexibilización de las reglas de imputación y relativización de los principios político-criminales de garantía”.²⁵

Tal y como nos muestra esta definición vemos que este expansionismo provoca injerencias en las garantías y principios de nuestro Ordenamiento Penal. En lo relativo a los delitos de terrorismo, vemos que las garantías y principios afectados, en mayor medida son el principio de intervención mínima y el principio de legalidad y seguridad jurídica. Concretamente el principio de proporcionalidad y el principio de taxatividad, respectivamente.

3.2. Garantías y principios de nuestro Ordenamiento Penal afectados por las reformas en los delitos de terrorismo.

Dentro de nuestro Ordenamiento Penal encontramos un conjunto de garantías y principios que marcan la regulación y actuación del Derecho Penal. Dentro de estos principios encontramos, entre otros, el principio de legalidad, el principio de territorialidad, el principio de igualdad ante la ley, así como el principio de intervención mínima. En este apartado únicamente nos centraremos en aquellos que se han visto afectados en mayor medida por las reformas llevadas a cabo en materia de delitos de terrorismo. El principio de intervención mínima y el principio de legalidad.

3.2.1. El principio de intervención mínima. El principio de proporcionalidad.

MUÑOZ CONDE aclara que “el principio de intervención mínima debe garantizar un Derecho Penal mínimo, reducido a las mínimas intervenciones posibles para asegurar la libertad de los ciudadanos”²⁶. Este mismo autor nos dice que del principio de intervención mínima, se derivan una serie de consecuencias²⁷: La primera es que el Derecho Penal solamente deberá intervenir en aquellos casos donde no sean suficientes las sanciones previstas por otras ramas del Derecho; La segunda consecuencia de la aplicación de este principio provoca que la misión del Derecho Penal no sea la de proteger todos los bienes jurídicos ni la de protegerlos frente a cualquier ataque, sino que solo debe intervenir en aquellos ataques graves y a los bienes jurídicos más importantes; La tercera consecuencia provocada por el principio de intervención mínima es la elección de la sanción penal menos grave, si es suficiente, a efectos preventivos, respecto de otra sanción más grave.

²⁵ Definición de SILVA SANCHEZ, J.M., y encontrada en CARRASCO JIMÉNEZ, Edison. “El concepto de “expansión” del Derecho Penal puesto en cuestionamiento. Su relación conflictiva con el concepto de “inflación” Penal.” *Estudios Penales y Criminológicos.*, vol. XXXVII (2017), 39-86. Pág.: 43. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/316322130_El_concepto_de_expansion_del_derecho_Penal_pu_esto_en_cuestionamiento_Su_relacion_conflictiva_con_el_concepto_de_inflacion_Penal. Consultada en abril de 2020.

²⁶ MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal. Parte General*. 9ª Edición. Tirant lo Blanch, 2015. Pág. 77.

²⁷ Ibidem.

Mas adelante, cuando se vean los diferentes conflictos que han originado las reformas del Código Penal en materia de terrorismo, con estos principios y garantías, se observará que, en ocasiones, el principio de intervención mínima no se cumple.

Antes de pasar a analizar el principio de proporcionalidad incluido en el principio de intervención mínima, me gustaría volver a citar a FERRAJOLI que definió con gran precisión el principio de intervención mínima y dijo: “Un sistema penal está justificado únicamente si la suma de las violencias -delitos, venganzas y puciones arbitrarias- que él puede prevenir, es superior a la de las violencias constituidas por los delitos no prevenidos y por las penas para ellos conminadas. Por tanto, se puede decir, que la pena está justificada como el mal menor -esto es, sólo si es menor, ósea menos aflictiva y menos arbitraria- respecto a otras reacciones no jurídicas y más en general, que el monopolio estatal de la potestad punitiva está tanto más justificado cuanto más bajos son los costos del derecho Penal respecto a los costos de la anarquía punitiva²⁸”.²⁹

Una de las consecuencias más afectadas del principio de intervención mínima, tal y como veremos más adelante, es el principio de proporcionalidad, relacionado con la tercera consecuencia mencionada *supra*. La consecuencia mencionada hablaba de que debe ser preferible la sanción más leve a la más grave. Esto provoca la aparición del principio de proporcionalidad, siendo éste una idea de Justicia inmanente a todo el Derecho. En palabras del propio autor “a cada uno debe de dársele según sus merecimientos”.

Por ello, el contenido de este principio nos dice que “las penas deben ser proporcionadas a la entidad del delito cometido o que éstos no pueden ser reprimidos con penas más graves que la propia entidad del daño causado por el delito”. Para lograr esta proporcionalidad se deberían seguir una serie de criterios, que tal y como muestran las reformas que hemos analizado antes, y criticaremos posteriormente, no se cumplen. Criterios tales como la importancia del bien jurídico afectado, la forma de ataque al bien jurídico, u el desvalor ético-social del comportamiento realizado.³⁰

3.2.2. El principio de legalidad y seguridad jurídica. El principio de taxatividad.

La Constitución de 1978 dedica dos artículos al principio de legalidad: el art. 9.3, que recoge de una forma general que la Constitución garantiza el principio de legalidad y el art. 25.1, que establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

²⁸ FERRAJOLI, Luigi. “Derecho y Razón”. Ed. Trotta. 1995. Página donde aparece el término 336.

²⁹ FERRAJOLI, Luigi. “El Derecho Penal mínimo”. En *Prevención y teoría de la pena*, 25-48. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 1995. Pág. 39.

³⁰ Todo lo relativo al principio de proporcionalidad ha sido extraído de: MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal. Parte General*. 9ª Edición. Tirant lo Blanch, 2015. Pág. 94-95.

El principio de legalidad lo podríamos definir como “el principio jurídico según el cual no puede castigarse una acción u omisión si no está prevista como delito en una ley. *Nullum crimen sine lege*”³¹. Este principio engloba muchos otros, así como otras garantías, tales como la reserva de ley, la prohibición de retroactividad, de analogía.

Otro principio rector del Ordenamiento Penal y, en general, del Ordenamiento Jurídico de cualquier Estado de Derecho, es el principio de seguridad jurídica, muy relacionado con el principio de legalidad que exponíamos. El principio de seguridad jurídica se define como la certeza que tiene el individuo de la permanencia de su situación jurídica que no será modificada sino por procedimientos regulares y conductos establecidos de manera clara y previa. En resumen, el conocimiento de que todo lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el denominado poder público es determinado por los procedimientos adecuados³². Por ello, para que el principio de seguridad jurídica sea efectivo es necesario, aparte de que todo lo prohibido, mandado y permitido, se encuentre recogido en los medios correspondientes, es decir, leyes, reglamentos y otras disposiciones legales, que estas disposiciones legales gocen de certeza, siendo aquí donde entra el principio de taxatividad.

El contenido material del principio de legalidad y seguridad jurídica nos dice que: “para que la ley cumpla con la función de establecer cuáles son las conductas punibles debe hacerlo de forma clara y concreta, sin acudir a términos excesivamente vagos que dejen de hecho en la indefinición el ámbito de lo punible”. Por lo tanto, vemos que una técnica legislativa correcta debe huir tanto de los conceptos excesivamente vagos, donde no se puede establecer una interpretación segura, tal y como vemos en algunas redacciones de las reformas analizadas en los primeros puntos del trabajo, siendo un ejemplo significativo el “formar parte” dentro de los delitos de colaboración con el terrorismo. Sin embargo, se siguen viendo faltas a este principio, propiciando esto la aparición de tipos abiertos donde las fronteras de la conducta punible es difusa, provocando esto un atentado contra el principio de taxatividad, y con ello contra la seguridad jurídica y contra el principio de legalidad, ya que como establece el Tribunal Constitucional en la sentencia 62/1982, de 15 de octubre,³³ la necesaria taxatividad, es decir, el cumplimiento del principio de taxatividad, es una exigencia de los principios de legalidad y seguridad jurídica.³⁴

³¹ Real Academia Española. Diccionario del español jurídico.

³² LÓPEZ OLIVA, José O. López. “La consagración del principio de seguridad jurídica como consecuencia de la revolución francesa de 1789”. *Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho*, 2011, vol. 14, no 28, p. 121-134. Pág. 123.

³³ Sentencia citada en MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal. Parte General*. 9ª Edición. Tirant lo Blanch, 2015. Página 116. La sentencia dice también, que el “uso de conceptos valorativos utilizados, en ocasiones, por la Ley Penal no tienen por qué faltar al principio de legalidad, siempre y cuando su significado pueda ser concretado por la interpretación en cada momento histórico”. Tal y como se nos dice en la misma página de la referencia.

³⁴ MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal. Parte General*. 9ª Edición. Tirant lo Blanch, 2015. Pág. 115-116.

4. El acercamiento a un Derecho Penal del enemigo.

Una vez analizadas las reformas del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, viendo la evolución y sentido legislativo que se pone en relieve desde el Código Penal del 95, pasaremos a examinar el destino que permiten vislumbrar estas reformas, el Derecho Penal del enemigo.

Por ello, analizaremos este Derecho Penal del enemigo. Seguidamente y para concluir este trabajo, enfrentaremos cuestiones concretas de las reformas analizadas, en materia de terrorismo, con los principios y garantías rectores de nuestro Ordenamiento Penal, sobre todo con los principios antes expuestos y vislumbrar así como nuestro Ordenamiento Penal, en lo relativo al terrorismo, se acerca al Derecho Penal del enemigo.

4.1.El Derecho Penal del enemigo.

El concepto de Derecho Penal del enemigo es un término acuñado e introducido por JAKOBS. Este autor contrapone “dos polos de un solo mundo o dos tendencias opuestas en un solo contexto jurídico-penal”. En uno de los polos encontramos el Derecho Penal del enemigo, que explicaremos a lo largo de este apartado y en el polo contrario, encontramos el Derecho Penal del ciudadano³⁵, sobre el cual no hablaremos, ya que no responde a la finalidad de este trabajo.

4.1.1. Características del Derecho Penal del enemigo.

La caracterización del concepto realizada por JAKOBS, y plasmada por CANCIO MELIA, permitirá entender mejor y, junto a unos esbozos filosóficos, llegar a la formalización del concepto de Derecho Penal del enemigo. La caracterización será la siguiente: “El Derecho Penal del enemigo se caracteriza por tres elementos: en primer lugar, se constata un amplio adelantamiento de la punibilidad, es decir, que en este ámbito, la perspectiva del Ordenamiento Jurídico-Penal es prospectiva (punto de referencia: el hecho futuro), en lugar de retrospectiva (punto de referencia: el hecho cometido). En segundo lugar, las penas previstas son desproporcionadamente altas: especialmente, la anticipación de la barrera de punición no es tenida en cuenta para reducir en correspondencia la pena amenazada. En tercer lugar, determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso suprimidas”.³⁶

A continuación se desgranarán y examinarán esas características. Tal y como hemos mencionado anteriormente, una de las características determinantes del Derecho Penal del enemigo es el adelantamiento extremo de la punibilidad, es decir, castigar por la posibilidad de cometer un delito futuro y no por haber cometido un delito. Según JAKOBS esto se produce por una despersonalización del delincuente, produciendo esto que el legislador se dirija a una legislación de lucha, pretendiendo así combatir a individuos que con su actitud se han apartado probablemente de modo decidido del

³⁵ JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del enemigo*. Madrid: Civitas, 2006. Pág. 21.

³⁶ Ibidem, págs. 79-81.

Derecho, no prestando la garantía cognitiva mínima necesaria para el tratamiento como persona. Por ello, la reacción que realiza el Ordenamiento Jurídico, en esta modalidad del derecho, no es compensar un daño producido a un bien jurídico protegido, sino eliminar un peligro. Materialmente JAKOBS piensa que se puede llegar a tratar de una custodia de seguridad anticipada denominada pena. En conclusión, “la punibilidad se adelanta un gran trecho hacia el ámbito de la preparación, y la pena se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción de hechos cometidos”.

Es aquí donde, en un primer lugar, vemos la diferenciación entre los dos polos opuestos señalados al inicio del punto, el Derecho Penal del ciudadano, donde se espera hasta que se haya exteriorizado el hecho delictivo para reaccionar, y el Derecho Penal del enemigo, que es interceptado muy pronto en el estado previo, y se le combate por su peligrosidad³⁷. La consecuencia de este adelantamiento de la punibilidad la podemos ver en el cambio de paradigma en los delitos de terrorismo, un cambio de un Derecho Penal de acción a un Derecho Penal de autor³⁸.

CANCIO MELIA, expone que el Derecho Penal del enemigo vulnera en diferentes puntos el principio de hecho. Entendiendo el principio de hecho como la exclusión de la responsabilidad jurídico-penal por meros pensamientos, en contraposición a un Derecho Penal del autor. Esta vulneración del principio de hecho la observamos en el Derecho Penal español en relación con las últimas modificaciones, relativas a los delitos de terrorismo, “donde se produce la eliminación iuspositiva de las diferencias entre preparación y tentativa, entre participación y autoría, e incluso entre fines políticos y colaboracionistas con una organización terrorista”. Estas reformas, con la anticipación de las barreras de punición, no tienen por qué vulnerar el principio de hecho, sino que hacen tomar una dirección al Código Penal centrada en la identificación de un determinado grupo de sujetos, más que en la definición de un hecho considerado delictivo.³⁹

La segunda característica a analizar es la desproporción que encontramos en las penas, las cuales son excesivas tomando de referencia el punto de punibilidad que se castiga, es decir, no teniendo en cuenta el adelantamiento de la barrera de punición del que se hablaba antes. Para analizar esta característica acudiremos a los que CANCIO MELIA menciona como ascendentes del Derecho Penal del enemigo: el Derecho Penal simbólico y el resurgir del punitivismo.

El Derecho Penal simbólico busca aportar una tranquilidad, como bien recoge el autor ya citado. “El sentido crítico del Derecho Penal simbólico hace referencia a que determinados agentes tan sólo persiguen el objetivo de dar la impresión tranquilizadora

³⁷ JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del enemigo*. Madrid: Civitas, 2006. Págs. 38-43.

³⁸ El derecho Penal de autor lo podemos definir en un tipo Penal basado únicamente en la clasificación de tipos de autor y su adecuado tratamiento o represión con independencia de si han cometido un delito concreto. Real Academia Española. Diccionario del español jurídico.

³⁹ JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del enemigo*. Madrid: Civitas, 2006. Págs. 98-101.

de un legislador atento y decidido”⁴⁰. A consecuencia de esto, y relacionado con la despersonalización del sujeto que exponíamos anteriormente, el Derecho Penal simbólico identifica un tipo de autor, definido no como un igual sino como un sujeto no integrado en la sociedad⁴¹, que en nuestro caso es el terrorista. Al inicio del trabajo hemos hablado del enorme pavor que ocasionaba la figura del terrorista en nuestra sociedad. Por eso, el Derecho Penal del enemigo, junto con el Derecho Penal simbólico intenta dar una apariencia tranquilizadora tratando al terrorista como un enemigo y endureciendo las penas, pero esto no sería posible sin el resurgir del punitivismo, ya que el recurso del Derecho Penal no es solo un instrumento para producir tranquilidad mediante el mero acto de promulgación de normas, sino también mediante el endurecimiento de las penas ya existentes⁴². Pudiendo decir que esta desproporción de las penas tiene el único objetivo de sacar al sujeto, considerado terrorista que tanto terror causa en la ciudadanía, el mayor tiempo posible de la sociedad, causando un conflicto esto con el principio de reinserción enmarcado en nuestro Ordenamiento Jurídico, ya que no se encuentra otra explicación para que un sujeto que colabora con una organización terrorista transportando armas, por ejemplo, tenga la misma pena a aplicar que una persona, que no goza de esa condición de terrorista, autora de un homicidio. Para concluir, JAKOBS nos dice que la función de la pena no debería de ser la expuesta, y lo hace a través de esta frase: “La ejecución de la pena supone hacer efectivo un derecho y no una despersonalización del autor”.⁴³

La tercera y última característica a analizar es la relativización e incluso supresión de determinadas garantías procesales. Esta característica no será analizada con tanto hincapié como las otras dos, ya que el Derecho Procesal Penal no entra dentro de los objetivos de este trabajo. Este breve análisis comenzará con una referencia a la tendencia que está siguiendo el Derecho Procesal Penal de Alemania, teniendo éste gran influencia en el español. En el Derecho Procesal alemán podemos ver como el legislador germánico se caracteriza por acortar, abaratar y desformalizar el proceso, es decir, las reformas van encaminadas a favorecer los interés de la víctima realizándose a costa de los del imputado⁴⁴, provocando una reducción de sus garantías.

Observamos que, en un mundo donde cada vez encontramos un mayor número de amenazas, los límites normativos del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal en un Estado de Derecho se debilitan, esto se produce en gran parte por la esperanza de la ciudadanía de que, estas amenazas, van a ser afrontadas y solucionadas con eficacia por el Derecho Penal.⁴⁵ En España, la política criminal se está convirtiendo en una política de criminalización, provocando esto que no se busque la descriminalización de la sociedad.

⁴⁰ SILVA SÁNCHEZ, *Aproximación* nota 6), pág. 305. Cita recogida en: JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del enemigo*. Madrid: Civitas, 2006. Pág. 68.

⁴¹ JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del enemigo*. Madrid: Civitas, 2006. Pág. 78.

⁴² JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del enemigo*. Madrid: Civitas, 2006. Págs. 69-70.

⁴³ JAKOBS, Günther. *Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal*, trad. Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo Sánchez, Madrid: Civitas, 2003. Pág. 71.

⁴⁴ HASSEMER, Winfried. *Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en derecho Penal*. Ed. Temis S.A. 1999. Pág. 9.

⁴⁵ *Ibidem*, pág 21.

Por ello, las novedades legislativas producen una ampliación de los tipos penales, aumentos en la gravedad de las penas, y no lo contrario. Todo esto, junto con lo que hemos mencionado en este mismo punto, llevan a una modificación del proceso donde, en los ámbitos considerados como más amenazantes, tales como terrorismo, delincuencia organizada, narcotráfico, se plasma una aceleración, facilitación y agilización del procedimiento y de la instrucción⁴⁶, llevando esto consecuentemente a una reducción de las garantías procesales de los sujetos que se han demonizados por una sociedad cada vez más asustada.

4.1.2. Esbozos filosóficos necesarios para comprender el Derecho Penal del enemigo.

Si bien este punto orientado a la filosofía no entra del todo en el marco de este trabajo, entiendo indispensable la explicación de estas cuestiones filosóficas para lograr entender la despersonalización del sujeto, del terrorista, y la aparición del Derecho Penal del enemigo en un Estado de Derecho. Además, con estas nociones, se observará que el origen de estos conceptos tratados no radica en JAKOBS, sino que eminencias relacionadas con la filosofía del Derecho habían tratado ya este asunto en sus obras. Para introducir esta pincelada a las teorías suscritas por los autores que vamos a mencionar, me gustaría advertir que se tomará el estudio filosófico que realiza JAKOBS para exponer las cuestiones filosóficas de su propio concepto⁴⁷. Estas breves nociones no van encaminadas a realizar un estudio filosófico sino a aclarar que la distinción entre Derecho Penal del ciudadano y el Derecho Penal del enemigo, y por tanto, la existencia de un *status* de ciudadano y otro *status* de enemigo venía siendo referenciada con anterioridad.

Dentro del amplio espectro de la filosofía del Derecho, los autores que más han hablado sobre este tema son aquellos que fundamentaban el Estado de modo estricto mediante un contrato. En conclusión, aquellos que “representan el delito en el sentido de que el delincuente infringe el contrato, de manera que ya no participa de los beneficios de este: a partir de ese momento, ya no vive con los demás dentro de una relación jurídica”. Pudiendo ver en esta afirmación el borrador de una despersonalización del autor del delito. Dentro de esta tesis encontramos unos autores más radicales que otros. Entre los autores más radicales encontraríamos a ROUSSEAU y a FICHTE.

ROUSSEAU⁴⁸ afirma que cualquier malhechor que ataque el derecho social deja de ser miembro del Estado, puesto que se halla en guerra con este. Esto lo podemos extraer de su frase: “al culpable se le hace morir más como enemigo que como ciudadano”.

⁴⁶ Ibidem, pág. 23.

⁴⁷ El estudio filosófico mencionado lo encontramos en: JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del enemigo*. Madrid: Civitas, 2006. Págs. 25-33.

⁴⁸ ROUSSEAU, *Staat und Gesellschaft*. “Contrato social”, traducido y comentado por WEIGEND, 1959, pág. 33 (libro segundo, capítulo V). Cita situada en la referencia 6 (pág. 26) de la obra citada en la referencia 47 de este trabajo.

Siguiendo esta tesis, nos encontramos con FITCHE⁴⁹ que afirma: “quien abandona el contrato ciudadano en un punto en el que en el contrato se contaba con su prudencia, sea de modo voluntario o por imprevisión, en sentido estricto pierde todos sus derechos como ciudadano y como ser humano, y pasa a un estado de ausencia completa de derechos”. Ambos autores defienden la deshumanización de la que hablamos así como la extracción de ese tipo de delincuente de la sociedad de forma radical, haciéndonos ver que el *status* de ciudadano puede perderse.

JAKOBS frente a estas dos tesis expuestas argumenta que el Ordenamiento Jurídico debe de mantener dentro del Derecho al criminal por dos razones. El delincuente tiene derecho a volver a reincorporarse a la sociedad y recuperar su *status* de ciudadano, así como el deber de reparar el daño causado con su acción. Por lo tanto, si seguimos las tesis de esos dos autores y eliminamos al sujeto que ha delinquido, sea cual sea su delito, de la sociedad impediremos, en un primer lugar, su reinserción, principio marcado por la propia Constitución española, y la reparación de ese daño producido.

Frente a estos dos autores que mantienen tesis más radicales nos encontramos con HOBBS y KANT, los cuales, también hablaron de un Derecho Penal del enemigo en sus obras, aunque no lo referenciaran con tal nombre. El primero de ellos sostiene que la sociedad sin un soberano se mantiene en un estado de guerra constante, el denominado estado de naturaleza, *homo hominis lupus*⁵⁰, por ello es necesaria la realización de un contrato social donde los súbditos, los ciudadanos, acaten el poder de un soberano, el Estado, para acabar con este estado brutal de naturaleza. Es el Estado como soberano y no otro, el único que puede contener esta guerra constante a la que hace referencia el autor. Por ello, HOBBS, considera enemigo al delincuente, no pudiendo este infringir la ley, ya que no está sujeto a esta, produciendo esto que se le declare hostil, y por lo tanto, en una situación de hostilidad declarada, sea legítima la producción de cualquier clase de daños.⁵¹ Aquí encontramos un boceto de un Derecho Penal del enemigo, si bien es cierto, que HOBBS, al contrario que ROUSSEAU y FITCHE, no considera que todos los delincuentes deban de perder su condición de ciudadano, y con ello que este legitime la producción de cualquier daño hacia ellos, sino únicamente deben de ser considerados como tales los reos por un delito de rebelión. Los delincuentes “comunes”, dicho *grosso modo*, no pueden ser considerados como enemigos y perder su condición de súbdito, de ciudadano, ya que, como podemos extraer de la obra de HOBBS, la realización de estas acciones viene implícita en su naturaleza, teniendo el Estado (soberano) la función de contenerla, no de erradicarla.

Por último, nos encontramos a KANT, el cual hace una distinción similar a la de HOBBS. El sujeto se puede encontrar en un estado de naturaleza caracterizado por la continua inseguridad y un estado jurídico-civil, donde esa inseguridad desaparece. Kant

⁴⁹ FITCHE, *Grundlage des Naturrechts nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre*, en: *Sämtliche Werke*, ed. a cargo fr J.H. FICHTE, Zweite Abtheilung. A. Zur Rechts- und Sittenlehre, tomo primero, s.f., pág 260. Cita situada en la referencia 7 (pág 27) de la obra citada en la referencia 47 de este trabajo.

⁵⁰ El hombre es un lobo para el hombre.

⁵¹ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “El Leviatán y el derecho Penal”. Pág. 2-3. Obtenido en http://perso.unifr.ch/derechoPenal/assets/files/articulos/a_20120808_01.pdf. Consultada en abril de 2020.

diferencia dos tipos de reacciones para aquel que transgrede la norma: Por un lado la reacción frente la agresión formada por dos sujetos, activo y pasivo, que se encuentran en ese estado jurídico-civil y, por otro lado, la lesión o mera privación de seguridad necesaria, cuando el infractor se encuentra en un estado de naturaleza. KANT asegura que, la mera permanencia de un sujeto en estado de naturaleza, mientras el resto se encuentra en un estado jurídico-civil priva al resto de esa seguridad que busca dicho estado, el estado jurídico civil, y por lo tanto les lesiona en el instante en que se encuentra junto a ellos, aunque no sea de forma activa, sino por la ilegalidad de su *status* que provoca la continua amenaza al resto de la ciudadanía. Estos sujetos que se niegan a aceptar el pacto social de extraerse de ese estado de naturaleza y pasar a un estado jurídico-civil, se autoexcluyen de este, pudiendo ser tratados, por lo tanto, de manera diferente a esos ciudadanos que si han aceptado el pacto⁵². Por ello, Kant realiza, si bien menos agresiva que el resto de los autores, una distinción entre un Derecho del ciudadano y un Derecho del enemigo.

4.1.3. Concepto del Derecho Penal del enemigo.

Posteriormente al análisis de las características del Derecho Penal del enemigo y a la exposición de algunos esbozos filosóficos, nos encontramos en disposición de establecer un concepto de Derecho Penal del enemigo.

El Derecho Penal del enemigo constituye una reacción de combate del Ordenamiento Jurídico contra individuos especialmente peligrosos, ya que, paralelamente a la ampliación de las medidas de seguridad, se produce un procesamiento desapasionado e instrumental. Por ello, se puede observar que, el Estado, con la aplicación de esta modalidad de Derecho Penal, no habla con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos⁵³. Sumado a lo expuesto, y desde el punto de vista de la psicología social, vemos que no solo se produzcan de forma prudente “operaciones de combate”, sino que la aplicación del Derecho Penal del enemigo origina una cruzada contra delincuentes demonizados por la sociedad⁵⁴.

Junto con lo aquí mencionado y lo expuesto a lo largo de este trabajo podríamos conceptualizar el Derecho Penal del enemigo como aquel derecho que adelanta las barreras de la punibilidad hasta límites insoportables, impone penas desproporcionadas e incluso suprime o relativiza las garantías procesales de los acusados, con la única finalidad de tranquilizar a la ciudadanía. La tranquilidad a la que nos referimos la muestra a través de la “identificación (mediante exclusión) de una categoría de sujetos como enemigos, y la correspondiente orientación al Derecho Penal de autor de la regulación”⁵⁵.

⁵² PÉREZ DEL VALLE, Carlos. “La fundamentación iusfilosófica del Derecho Penal de enemigo. Precisiones sobre la interpretación de Kant”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2008, núm.10-03, p. 1-14. Págs 5-7. Disponible en <http://criminnet.ugr.es/recpc/10/recpc10-03.pdf>. Consultada en abril de 2020.

⁵³ CANCIO MELIA, Manuel. *Los delitos de terrorismo: Estructura típica e injusto*. Reus, S.A. Madrid, 2010. Págs. 27-28.

⁵⁴ Ibidem, pág. 30.

⁵⁵ Ibidem, pág. 37.

La identificación, sumada al adelantamiento de la punibilidad, a la desproporción de las penas y a la relativización de las garantías procesales provoca la extracción de la sociedad de aquellos sujetos que considera enemigos. Gracias a esto vemos que el Estado que utiliza esta legislación de lucha no busca solucionar un problema, sino erradicarlo, poniendo en peligro el Estado de Derecho.

Para ratificar esta última sentencia, acudiré de nuevo a JAKOBS, que afirmó: “Un Derecho Penal del enemigo claramente delimitado es menos peligroso, desde la perspectiva del Estado de Derecho, que entremezclar todo el Derecho Penal con fragmentos -tal y como vemos en la legislación Penal española relativa al terrorismo- de regulaciones propias del Derecho Penal del enemigo”⁵⁶.

4.2.El conflicto que han originado las nuevas reformas con los principios y garantías del Ordenamiento Penal. Distanciamiento del Derecho Penal del ciudadano.

A la hora de finalizar, vamos a hablar de aquellas cuestiones más controvertidas de las reformas y que nos dan pie a lo que se ha analizado a lo largo del trabajo, al acercamiento del Derecho Penal español, en lo relativo a los delitos de terrorismo, al Derecho Penal del enemigo.

Acudiendo a la caracterización del Derecho Penal del enemigo, que se ha realizado al principio de este punto, analizaremos los comportamientos generales típicos de esta legislación de lucha y veremos cómo se han ido introduciendo en nuestro Código Penal. Para esta breve introducción se hablará del adelantamiento de la punibilidad, afectando, en la mayoría de las ocasiones, al principio de taxatividad y de la desproporcionalidad de las penas.

El adelantamiento de la punibilidad provoca que no haya una acción concreta para tipificar, ya que se busca punir a un determinado sujeto para evitar que realice una acción delictiva, es decir, se realiza una punición preventiva. Al no haber un comportamiento concreto que castigar se incluyen en el tipo numerosas acciones, atentando esta vaguedad contra el principio de taxatividad, ya que, dependerá de la interpretación que se realice de ese conjunto de acciones tipificadas, el castigar a una persona por un delito de terrorismo o no hacerlo.

Esta característica del Derecho Penal del enemigo ha ido evolucionando conforme se iba modificando el Código Penal en lo relativo a los delitos de terrorismo. Más adelante se hablará de delitos concretos de las posteriores reformas, pero antes de seguir hablaré sobre una muestra de este adelantamiento, que ya se daba en el Código Penal del 95: Art. 576, delitos de colaboración, “Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa (...) el que lleve a cabo, recabe, o facilite, cualquier acto de colaboración con las

⁵⁶ JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del enemigo*. Madrid: Civitas, 2006. Pág. 56.

actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista”, la redacción de este artículo da pie a muchas interpretaciones, ya que se observa que se equiparan actos de apoyo material que pueden mostrar únicamente un respaldo político a la figura de colaboración con una banda terrorista. Esta redacción dio lugar a resoluciones jurisdiccionales donde sujetos, que sin tener ningún contacto con una organización terrorista, fueron acusados de colaboración con una organización terrorista, por pertenecer a una organización que, únicamente, respaldaba los objetivos de aquella⁵⁷.

Por último, se hablará de la desproporción que encontramos en las penas si tomamos de referencia el punto de punibilidad donde se encuentra el delito, es decir, si tomamos de referencia el adelantamiento de la punibilidad. A lo largo de la evolución que ha tomado el Código Penal se puede observar que esta desproporción ha ido aumentando, además también nos la encontrábamos en el Código Penal del 95, y no solo en los delitos de terrorismo, pudiendo decir que se encontraba ya legislación penal del enemigo. Señaladamente, de esta desproporción, encontramos con que tanto el que colabore con una organización terrorista, en cualquier forma, como aquel que solo almacene, transporte armas para esta organización, podrá ser penado con la misma pena que un reo de homicidio.

Una vez vistos estos comportamientos propios de la legislación de lucha característica del Derecho Penal del enemigo, se pasará a examinar tipos concretos que indican el acercamiento a este tipo de legislación. Las conductas serán tomadas de las reformas más importantes de nuestro Código Penal, en el aspecto de los delitos de terrorismo, la del 2010 y la del 2015.

Empezando con la reforma del 2010, hablaré sobre el delito de captación, adoctrinamiento, adiestramiento y formación, y el delito de propaganda.

El primero de los delitos mencionados lo encontramos en el art. 576.3 del CP, en su redacción del 2010. Este nuevo apartado se incluye porque el legislador estimo que el Estado español incumplía las obligaciones dimanantes de la DM 2008, que ya mencionábamos al principio de este trabajo. El problema lo encontramos en el mismo apartado, el cual ha sido ampliamente criticado por la doctrina por tres aspectos fundamentales: La ampliación desmesurada del concepto de colaboración, el gran adelantamiento de la punibilidad en lo relativo al adoctrinamiento y la desproporcionalidad de las penas⁵⁸. En este aspecto solo hablaremos de estos dos últimos puntos criticados por la doctrina que, como se ha visto anteriormente, forman parte de los caracteres propios del Derecho Penal del enemigo.

⁵⁷ CANCIO MELIA, Manuel. "Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo. Algunas consideraciones sobre la regulación de las infracciones en materia de terrorismo en el Código penal español después de la LO 7/2000", Jueces para la democracia, no 44, 2002, págs. 19-26. Versión reformada de una ponencia presentada por el autor el día 28/02/2001 en el seminario de Derecho Penal dirigido por el profesor SILVA SANCHÉZ en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Pág 25.

⁵⁸ CANO PAÑOS, Miguel Ángel. "Los delitos de terrorismo en el Código Penal español tras la reforma de 2010". *La Ley Penal: revista de derecho Penal, procesal y penitenciario*, 2011, no 86. Pág. 8.

- El gran adelantamiento de la punibilidad: En referencia al adoctrinamiento encontramos una situación interpretativa difícil, ya que es ardua la distinción entre una mera expresión de ideas y la conducta propia de adoctrinar. Por lo tanto, debido a la gran posibilidad de atentar contra el derecho fundamental de libertad de expresión e incluso ideológica, el adoctrinamiento como tal no debería de estar tipificado, solo teniendo que estar reprobado penalmente la inculcación de una idea que implicará la comisión de delitos para defenderla, es decir, el adoctrinamiento debería de relacionarse con los métodos para cometer un delito de terrorismo y no con una expresión de ideas.
- La desproporcionalidad de las penas: Se observa que cualquiera que sea la gravedad, todas las formas de colaboración, se castigan con el mismo rigor punitivo, prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses, sin tener en cuenta la gravedad de estas formas.⁵⁹

El segundo de los delitos, el delito de propaganda enmarcado en el art. 579.1 del CP, con la redacción del 2010, también ha provocado numerosas críticas por su redacción, ya que esta dice que las conductas de distribución o difusión pública de contenidos de carácter más o menos terrorista son medios aptos para generar un caldo de cultivo que puede llegar a madurar en la decisión de delinquir⁶⁰. En virtud de esto, vemos que no es necesario realizar un hecho concreto, afectando esta posibilidad, junto al adelantamiento excesivo de las barreras de punición, al principio de taxatividad, ya que vemos que se corre el gran riesgo de que se incluyan dentro del ámbito típico de este delito, escritos, publicaciones o incluso informaciones de contenido neutro que, tras su distribución, puedan ser consideradas por un Tribunal aptas para fomentar la comisión de un delito. Por lo tanto, vemos aquí un atentado contra la libertad ideológica y de expresión, ya que se están castigando la difusión de cualquier mensaje que, por su contenido, pueda incrementar el riesgo de la comisión de un delito de terrorismo, sin haber realmente un peligro concreto, ya que se tipifican comportamiento de difusión y distribución pública que no se refieren a personas concretas, penalizando la mera manifestación de ideas⁶¹.

En conclusión podemos observar, en estos dos tipos delictuales, el nacimiento de un Derecho Penal del enemigo, ya que, ambos, comparten las características principales con esta legislación de lucha.

La reforma del Código Penal llevada a cabo en 2015 no mejora la situación con respecto a esta legislación, sino que se siguieron viendo más modificaciones en los delitos de terrorismo que nos acercaban al Derecho Penal del enemigo. En este punto solo mencionaremos dos, la definición del propio delito de terrorismo y el delito de enaltecimiento. En lo relativo a la definición de delitos de terrorismo instaurada por dicha reforma, y sobre la que hablamos al principio del trabajo, solo me resta decir que cinco relatores de derechos humanos pertenecientes a la ONU señalaron que la propia

⁵⁹ Ibidem, pág. 9.

⁶⁰ Ibidem, pág. 11.

⁶¹ CANO PAÑOS, Miguel Ángel. "Los delitos de terrorismo en el Código Penal español tras la reforma de 2010". *La Ley Penal: revista de derecho Penal, procesal y penitenciario*, 2011, no 86. Págs. 12-13.

definición de los delitos de terrorismo eran excesivamente amplias e imprecisas - afectando y vulnerando el principio de taxatividad-, pudiéndose criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y pudiendo dar lugar entre otras cuestiones a restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión⁶².

Otra cuestión bastante controvertida, tratada ampliamente por la doctrina, es el delito de enaltecimiento del terrorismo, enmarcado en el art. 578 del CP con la redacción resultante de la reforma de 2015. Vemos que con esta redacción se produce una modificación cualitativa en el tratamiento político-criminal y penológico, provocando esta modificación que el tratamiento jurídico-penal de un ciudadano que realice este delito, sin siquiera poseer antecedentes penales, sea de una pena de 1 a 3 años de prisión⁶³. Vemos que este delito de enaltecimiento del terrorismo, más que un tipo penal dedicado a proteger al Estado contra la actividad terrorista está siendo utilizado como instrumento de control⁶⁴, tal y como vimos que realizaba el Derecho Penal del enemigo, controlar al delincuente antes que realice el delito y despersonalizándolo, produciendo una criminalización de los delitos de opinión.

⁶² Referencia 13 situada en la página 11 de CANO PAÑOS, Miguel ángel. “La reforma Penal de los delitos de terrorismo en el año 2015. Cinco cuestiones fundamentales”. *Revista General de Derecho Penal*, 2015, no 23.

⁶³ CORRECHER MIRA, Jorge. “El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas tras la reforma de la LO 2/2015 en materia de delitos de terrorismo”. *Revista General de Derecho Penal*, 2017, no 27. Pág. 5-6.

⁶⁴ Ibidem, pág. 15-16.

5. Conclusiones

La primera conclusión a la que llegamos tras ver la evolución de los delitos de terrorismo a lo largo del tiempo es que éstos no son más que la cualificación de distintos tipos comunes. Por lo tanto, no son un delito propio, sino un conjunto de delitos comunes, cualificados por razón de su finalidad o por la pertenencia a una organización terrorista, que van en aumento conforme los legisladores van incluyendo nuevas conductas realizadas por los terroristas. Vemos a su vez que, el legislador ha aumentado el número de sujetos capaces de ponerse en el lugar de sujetos activos, como se puede ver en la inclusión de la posibilidad de ser responsables de un delito de terrorismo de las personas jurídicas. Por último, se aclara en el trabajo que, para todos los delitos de terrorismo no se exigirá una conducta dolosa, incluyéndose en el ámbito del tipo subjetivo la imprudencia grave.

Respecto a los principios y garantías de nuestro Ordenamiento, se observa que tanto el principio de taxatividad como el principio de proporcionalidad van perdiendo eficacia. Las continuas reformas que ha ido haciendo el legislador con respecto a los delitos de terrorismo han provocado una expansión del Derecho Penal que enerva y llega a los límites, incluso los sobrepasa, de estos dos principios, produciendo una restricción y reinterpretación de los principios y garantías clásicos del Derecho Penal.

Por último, este trabajo muestra el Derecho Penal del enemigo, viéndolo como una legislación de lucha donde encontramos dos tratamientos diferenciados, el tratamiento al ciudadano, donde se mantienen las garantías, y el tratamiento del enemigo, donde se deshumaniza al sujeto activo. También se observa, a través de delitos concretos dados en el trabajo que nuestro Código Penal cada vez se acerca más a esta legislación de lucha, donde se produce un adelantamiento extremo de la punibilidad, una gran desproporción de las penas y una relativización de las garantías procesales.

Para evitar pensar que esta legislación de lucha se ha originado estos últimos días con la presencia de amenazas tales como el terrorismo o el narcotráfico, en el documento se plasma un estudio filosófico donde se aclara que el origen del Derecho Penal del enemigo es más antiguo, siendo tratado por los principales filósofos de la filosofía del Derecho.

A la hora de finalizar este estudio, tanto de la evolución del Código Penal, como del Derecho Penal del enemigo, me gustaría realizar una reflexión. El expansionismo del Derecho Penal y la aparición en nuestro Ordenamiento de bocetos del Derecho Penal del enemigo, no son compatibles con nuestro Estado de Derecho, produciendo una colisión e incluso, en numerosas ocasiones, un quebrantamiento de las libertades, derechos y garantías que tanto ha costado conseguir. Reafirmando esta reflexión encontramos una sentencia de CANCIO MELIA: “El Estado no debe de perder los nervios frente a los delitos terroristas. Y cuando recurre al «Derecho Penal» del enemigo, el Ordenamiento Jurídico entra en una situación de pánico. No debe hacerlo porque ello no es legítimo: tales delitos son «muestra de un déficit de libertades». Y porque no sirve para nada: no elimina ni disminuye los delitos que pretende combatir. Y también porque introduce en

el Código, bajo el amparo de la Ley, elementos que solo pretenden ser Derecho Penal, pero no lo son”⁶⁵.

⁶⁵ CANCIO MELIA, Manuel. "Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo. Algunas consideraciones sobre la regulación de las infracciones en materia de terrorismo en el Código penal español después de la LO 7/2000", *Jueces para la democracia*, N° 44, 2002, págs. 19-26

BIBLIOGRAFÍA.

- ÁLVAREZ CRUZ, Enrique. “La teoría de la acción finalista, de Hans Welzel. Exposición y crítica de la misma a través de un libro de Carlos Fontan”. https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292344043682?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=EstudioDoctrinal&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D1963_0584.pdf&blobheadervalue2=1288774760129. Consultada en abril de 2020.
- ASUA BATARRITA, Adela. “Concepto jurídico de terrorismo y elementos subjetivos de finalidad. Fines políticos últimos y fines de terror instrumental”. *Estudios jurídicos en Memoria de José M. “Lidón*, 2009, vol. 8.
- CANCIO MELIA, Manuel. “Derecho penal del enemigo y delitos de terrorismo. Algunas consideraciones sobre la regulación de las infracciones en materia de terrorismo en el Código penal español después de la LO 7/2000”, *Jueces para la democracia*, no 44, 2002, págs. 19-26.
- CANCIO MELIA, Manuel. *Los delitos de terrorismo: Estructura típica e injusto*. Reus, S.A. Madrid, 2010.
- CANO PAÑOS, Miguel ángel. “La reforma Penal de los delitos de terrorismo en el año 2015. Cinco cuestiones fundamentales”. *Revista General de Derecho Penal*, 2015, no 23.
- CANO PAÑOS, Miguel Ángel. “Los delitos de terrorismo en el Código Penal español tras la reforma de 2010”. *La Ley Penal: revista de derecho Penal, procesal y penitenciario*, 2011, no 86.
- CAPITA REMEZAL, Mario. *El concepto jurídico de terrorismo: los delitos de terrorismo en el Código Penal de 1995, un análisis doctrinal y jurisprudencial: especial referencia al terrorismo individual*. 2007. Tesis doctoral. <https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/11506>. Consultada en abril 2020.
- CARRASCO JIMÉNEZ, Edison. “El concepto de “expansión” del Derecho Penal puesto en cuestionamiento. Su relación conflictiva con el concepto de “inflación” Penal.” *Estudios Penales y Criminológicos.*, vol. XXXVII (2017), 39-86. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/316322130_El_concepto_de_expansion_d_el_derecho_Penal_puesto_en_cuestionamiento_Su_relacion_conflictiva_con_el_concepto_de_inflacion_Penal. Consultada en abril de 2020.
- CORRECHER MIRA, Jorge. “El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas tras la reforma de la LO 2/2015 en materia de delitos de terrorismo”. *Revista General de Derecho Penal*, 2017, no 27.
- COTEÑO MUÑOZ, Alejandro. “Terrorismo individual= Individual terrorismo.” *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad*, 2018, no 15, p. 262-281. <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/view/4356>. Consultada en abril 2020.
- FERRAJOLI, Luigi. “El Derecho Penal mínimo”. En *Prevención y teoría de la pena*, 25-48. Santiago de Chile: Editorial Jurídica ConoSur Ltda., 1995.

- HASSEMER, Winfried. *Persona, mundo y responsabilidad. Bases para una teoría de la imputación en derecho Penal*. Ed. Temis S.A. 1999.
- JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. *Derecho Penal del enemigo*. Madrid: Civitas, 2006.
- JAKOBS, Günther. *Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal*, trad. Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo Sánchez, Madrid: Civitas, 2003
- LOPEZ CALERA, Nicolás María. “El concepto de terrorismo: ¿Qué terrorismo? ¿Por qué el terrorismo? ¿Hasta cuándo el terrorismo?” *Anuario de filosofía del derecho*, 2002, no 19, p. 51-71.
- LÓPEZ OLIVA, José O. López. “La consagración del principio de seguridad jurídica como consecuencia de la revolución francesa de 1789”. *Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho*, 2011, vol. 14, no 28, p. 121-134.
- MADRIGAL NAVARRO, Javier. “Delitos de peligro abstracto, fundamento, crítica y configuración normativa”. *Revista Judicial*, Costa Rica, no 115. Pp. 169-186.
- MUÑOZ CONDE, Francisco. *Derecho Penal. Parte General*. 9ª Edición. Tirant lo Blanch, 2015.
- PÉREZ DEL VALLE, Carlos. “La fundamentación iusfilosófica del Derecho Penal de enemigo. Precisiones sobre la interpretación de Kant”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*. 2008, núm.10-03, p. 1-14.
- Real Academia Española. Diccionario del español jurídico.
- Real Academia Española. Diccionario de la lengua española.
- SAMIEDO, Juan Pablo. La estructura y organización de los grupos terroristas bajo la óptica del aprendizaje organizacional. *Documento Marco*, 2015, vol. 24. <http://www.ieee.es/contenido/noticias/2015/10/DIEEEM24-2015.html>. Consultada en abril 2020.
- ZAFFARONI, Eugenio Raúl. “El Leviatán y el derecho Penal”. Obtenido en http://perso.unifr.ch/derechoPenal/assets/files/articulos/a_20120808_01.pdf. Consultada en abril de 2020.
- ZÁRATE CONDE, Antonio; GONZÁLEZ CAMPO, Eleuterio. *Derecho Penal. Parte general*. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA, 2019.